



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

PRIMERA SALA

Resolución N° 010302772020

Expediente : 01177-2019-JUS/TTAIP
Recurrente : **IRIS NONOY VEGA CARREAZO**
Entidad : **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**
Sumilla : Declara fundado recurso de apelación

Miraflores, 28 de febrero de 2020

VISTO el Expediente de Apelación N° 01177-2019-JUS/TTAIP de fecha 4 de diciembre de 2019, interpuesto por **IRIS NONOY VEGA CARREAZO** contra el correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2019, mediante el cual la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** denegó su solicitud de acceso a la información pública, presentada el 15 de noviembre de 2019 con Registro de Expediente N° 000-URD003-2019-739382.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de noviembre de 2019, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, la recurrente solicitó a la entidad la entrega de copias de los roles de servicios mensual de los Oficiales de Aduana (Horarios) de las Intendencias de Aduana a nivel nacional que se reportan a la Gerencia de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales de enero de 2018 a noviembre de 2019.

Mediante correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2019, la entidad denegó la referida solicitud de acceso a la información pública por considerar que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada conforme a las excepciones descritas en el literal a) del numeral 1 del artículo 16 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS¹, toda vez que contiene el detalle de la conformación de los equipos de trabajo destinados al control aduanero, así como los horarios y ubicación de los mismos, designados para ejercer el control en el ámbito de los delitos aduaneros, entre otros, el tráfico ilícito de mercaderías (tráfico ilícito de drogas, patrimonio cultural, flora y fauna protegida, etc).

Con fecha 29 de noviembre de 2019 la recurrente interpuso el recurso de apelación materia de análisis, por considerar que la información solicitada no se encuentra comprendida dentro de la excepción planteada por la entidad, afirmando entre otras

¹ En adelante, Ley de Transparencia.

cosas, que el procedimiento específico de la entidad denominado "IPCF-PE.00.03: *Elaboración de Roles de Servicio del Personal de Oficiales de Aduanas*", establece en su numeral 6 que "Los roles de servicio entran en vigencia el primer (01) día de cada mes y se publica en un lugar visible dos (2) días antes de su vigencia, con el fin que el personal de Oficiales de Aduanas tome conocimiento y se traslade hasta los puestos asignados para cumplir su servicio"; en tal sentido, afirman que la documentación requerida ha sido publicada por la propia entidad en un lugar visible.

Adicionalmente a ello, señala la recurrente que en los roles de servicio no se detalla ningún plan de operación, adjuntando un rol de servicio correspondiente al mes de setiembre de 2019, resaltando que en dichos documentos no existe ningún plan específico para combatir algún delito u organización criminal.

Con fecha 27 de enero de 2020, la entidad solicitó a este colegiado día y hora para realizar un informe oral, el mismo que se llevó a cabo el día 24 de febrero de 2020 con la concurrencia de la recurrente Iris Nonoy Vega Carreazo y en representación de la entidad, la abogada Suhei Larisa Ynani García.

Mediante la Resolución N° 010102502020² este Tribunal admitió a trámite el citado recurso de apelación, requiriendo a la entidad la formulación de sus descargos, los cuales fueron presentados el día 24 de febrero de 2020 manifestando que i) los roles de servicio "tienen la condición de información reservada en la medida que, contiene la información que va a permitir llevar a cabo un real control aduanero". ii) ejercer el control operativo "implica llevar a cabo un conjunto de acciones operativas tendientes a reprimir 'delitos aduaneros' e 'infracciones administrativas', las cuales están presentes durante todo el trámite aduanero", iii) toda información referente al control aduanero "no debe ser entregada como información pública, por cuanto implica revelar información estratégica para cumplir con las funciones específicas encomendadas a la SUNAT, en relación a la reserva tributaria", iv) si se considera que esta información es pública y por tanto debe ser entregada a cualquiera que lo solicite "entonces se da lugar a que inclusive las personas afectadas con los 'controles' que ejercen los Oficiales de Aduanas tomen conocimiento de su identificación y ubicación en los días que sucedieron los hechos y hasta tengan conocimiento de los números de contacto para ubicarlos; razón por la cual podrían ser víctimas los Oficiales de Aduanas de cualquier tipo de represalias", y v) los roles de servicio requeridos contienen información "sobre los equipos de trabajo, horario de trabajo o turno; siendo esta información netamente de carácter laboral, pues precisamente determina cómo se debe desarrollar la relación laboral"; asimismo, cita la sentencia recaída en el Expediente N° 1006-2013-PHD/TC en el cual se solicitó a la referida entidad la entrega de "reportes de marcación del personal" y en la cual el Tribunal Constitucional señaló que dicha documentación no califica como información pública pues está vinculada a cómo se desarrolló la relación laboral.

II. ANÁLISIS

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

En este marco, el artículo 3 de la Ley de Transparencia establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones de ley, teniendo la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

² Notificada el 20 de febrero de 2020.

Por su parte, el artículo 10 del mismo cuerpo legal establece que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control; asimismo, para los efectos de la referida ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

Cabe anotar que el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia, establece que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser fundamentada por las excepciones de ley, agregando el primer párrafo del artículo 18 de la referida norma que las excepciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del mismo texto son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

En ese contexto, el literal a) correspondiente al numeral 1 del artículo 16 de la referida Ley de Transparencia, establece que el derecho de acceso a la información no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada, agregando que dicha excepción comprende únicamente aquella que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno, cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático, considerando reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla, comprendiendo únicamente los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.

Agrega el último párrafo del citado artículo 16 que, en los supuestos contemplados en dicho artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste, precisando que una vez que desaparezca la causa que motivo la clasificación, la información reservada es de acceso público.

Asimismo, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM³ señala que las entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada. Asimismo, que en el registro deberán consignar los siguientes datos: *a. El número de resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la resolución por la cual se le otorgo dicho carácter; b. El número de la resolución la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida; c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se le da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento que se produzca la correspondiente desclasificación; d. La fecha y la resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda; e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y, f. La fecha y la*

³ En adelante, Reglamento de la Ley de Transparencia.

resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.

2.1 Materia en discusión

De autos se aprecia que la controversia radica en determinar si la información solicitada por la recurrente se considera reservada conforme a la excepción comprendida en el literal a) del numeral 1 del artículo 16 de la Ley de Transparencia.

2.2 Evaluación de la materia en discusión

Sobre el particular, toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 4865-2013-PHD/TC indicando:

“La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos”.

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Transparencia, que consagra expresamente el Principio de Publicidad, establece que *“Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por (...) la presente Ley”.* Es decir, establece como regla general la publicidad de la información en poder de las entidades públicas, mientras que el secreto es la excepción.

En esa línea, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD/TC, ha señalado respecto del mencionado Principio de Publicidad lo siguiente:

“(…) Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado”.

Dentro de ese contexto, el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, en tal sentido, efectuando una interpretación *contrario sensu*, es perfectamente válido inferir que la administración pública tiene el deber de entregar la información con la que cuenta o aquella que se encuentra obligada a contar.

En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los considerandos 89 a 91 de la sentencia recaída en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, de fecha 16 de setiembre de 2006, ha establecido que las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública pueden resultar legítimas siempre que cumplan los siguientes requisitos:

“En primer término, deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse “por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. (...)

En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar ‘el respeto a los derechos o a la reputación de los demás’ o ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas’.

Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho”.

De igual modo, conforme al Fundamento 14 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC, para que la limitación del derecho de acceso a la información pública sea válida es necesario que el Estado acredite la existencia de un “apremiante interés público” o la presencia de “un bien, principio o valor constitucionalmente relevante” que quedaría afectado con la difusión de la información:

“Evidentemente, no es constitucionalmente tolerable que una declaración de confidencialidad se legitime por el sólo hecho de ampararse en la ley. Los derechos constitucionales, como lo eran en el Estado legal de derecho, no valen en el ámbito de las leyes, sino a la inversa: las leyes valen en el ámbito de los derechos fundamentales; de manera que si a través de una ley se limita el ejercicio de un derecho fundamental, tal restricción necesariamente debe sustentarse en un fin constitucionalmente valioso, además de presentarse como una medida estrictamente necesaria y adecuada para conseguir lo que se persigue alcanzar”
(subrayado agregado).

En cuanto a ello, la recurrente solicitó a la entidad la entrega de copias fedateadas de los roles de servicios mensual de los Oficiales de Aduana (Horarios) de las Intendencias de Aduana a nivel nacional que se reportan a la Gerencia de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales de enero de 2018 a noviembre de 2019, siendo que la entidad denegó la entrega de la documentación requerida alegando que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada conforme a la excepción descrita en el literal a) del numeral 1 del artículo 16 de la Ley de Transparencia, cuyo texto se reproduce a continuación:

*“16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:*

- 1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:*

a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos (...)"

Conforme se puede apreciar, el marco normativo establece la formalidad dentro de la cual se debe aplicar el precepto legal invocado por la entidad para denegar una solicitud de acceso a la información pública basado en la reserva de la mencionada información; es así que el último párrafo del artículo 16 de la mencionada ley, indica que los responsables de la clasificación de la información como reservada son los titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste.

Es ese mismo sentido, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que, las entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada, registro que comprende el número de resolución del titular del sector o del pliego y la fecha de resolución por la cual se le otorgó dicho carácter, entre otra información relacionada con dicha clasificación.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en los Fundamentos 29 y 33 de la sentencia del Pleno Jurisdiccional recaída en el Expediente N° 00005-2013-PI/TC, ha señalado expresamente lo siguiente:

"29. De lo antes expuesto, entre otras disposiciones constitucionales, se desprende que las excepciones que puedan ser reguladas por el legislador, para ser válidas, deben cumplir las siguientes condiciones: i) deben estar previstas en la ley de forma expresa y estricta, no pudiendo quedar al libre arbitrio de cada entidad de la Administración Pública; ii) deben perseguir objetivos legítimos que estén indeliblemente unidos a la protección de un fin constitucional; iii) deben ser estrictamente necesarias lo que implica además elegir la medida menos restrictiva posible; y iv) deben ser proporcionales con el grado de restricción del derecho de acceso a la información pública, de modo que el grado de ventajas o satisfacción del fin constitucional que se quiere proteger con la excepción sea, por lo menos, mayor que el grado de desventajas o restricción del derecho de acceso a la información pública.

(...)

33. De lo expuesto se desprende cómo el derecho fundamental de acceso a la información pública reconocido en el artículo 2, inciso 5, de la Constitución, junto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforman el parámetro de constitucionalidad que debe servir para identificar las exigencias constitucionales que se derivan de este derecho, así como las estrictas y únicas excepciones que pueden justificar la limitación del acceso a la información pública. Es conforme a dicho parámetro que la Administración Pública no sólo tiene la obligación constitucional de entregar la información que le soliciten los ciudadanos, salvo las aludidas excepciones, sino además aquella otra de efectivizar, incluso oficiosamente, de publicidad y transparencia respecto de tal información.

Y es que la Administración Pública no sólo debe entregar información recién cuando un juez le ordene hacerlo. Como ya se ha explicado antes y así desprende del respectivo mandato constitucional y legal, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la publicidad de la información financiada por el presupuesto público, de modo que la Administración tiene la obligación de hacer pública tal información. Las excepciones son aquellas expresa y únicamente contenidas en los artículos 15, 16 y 17 del TULO de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, e incluso dichas excepciones se aplican de modo restrictivo y sólo cuando la Administración ha justificado o motivado su clasificación como secreta, reservada o confidencial. Si no se ha justificado debidamente la respectiva clasificación carece de efectos la sola nominación formal (colocación de sellos con las expresiones "secreto" o "reservado"), debiendo en todo caso ser la última instancia administrativa en materia de transparencia y acceso a la información pública la encargada de examinar si la información calificada de secreta o reservada reviste realmente o no tal carácter".
(subrayado agregado)

En consecuencia, conforme se aprecia de autos la entidad no ha acreditado que la información solicitada haya sido clasificada como reservada de acuerdo al marco legal aplicable, como lo exige el Tribunal Constitucional en el antes citado Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC, el cual señala que la carga de la prueba de mantener en reserva el acceso a la información se encuentra a cargo de las entidades que la poseen.

De igual modo, de conformidad con lo señalado por el Tribunal Constitucional, en el Fundamento 6 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00950-00-HD/TC, el hecho de que una norma o acto administrativo atribuya la condición de seguridad nacional a una información no es razón suficiente para denegar el acceso a la información, conforme el siguiente texto:

"6. Si bien es cierto que, de conformidad con lo establecido por la precitada disposición constitucional, el ejercicio de este derecho tiene límites expresos cuando se establece que "Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional"; no obstante, para este Tribunal Constitucional, queda meridianamente establecido como principio de observancia obligatoria para jueces y tribunales, de conformidad con la Primera Disposición General de nuestra Ley Orgánica, que el solo hecho de que una norma o un acto administrativo, como en el presente caso, atribuya o reconozca la condición de seguridad nacional a una información determinada, no es razón suficiente, en términos constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad". (subrayado agregado)

A mayor abundamiento, es preciso señalar que el argumento planteado por la entidad respecto a que entregar dicha información implica dar a conocer la identificación y ubicación de los Oficiales de Aduanas de la entidad que participan en las actividades de detección y represión de delitos aduaneros, así como de tráfico ilícito de mercancías, no resulta aplicable en cuanto a que la entidad no ha acreditado que los colaboradores que realizaron tales servicios en los años 2018 y 2019 se mantienen en dichas labores y por ende siguen participando en tales operativos. No obstante, cabe reiterar que la entidad no ha señalado igualmente el documento con el cual se clasificó dicha documentación como "reservada".

En esa línea, es importante tener en consideración lo señalado por el Tribunal Constitucional en los Fundamentos 10 y 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 05173-2011-PHD/TC en la cual señala que no basta con alegarse que la información pueda afectar la seguridad e integridad de las personas, sino que ello debe ser acreditado, conforme el siguiente texto:

"10. Tampoco está de acuerdo este Tribunal con dicho argumento. Y es que recogiendo el argumento del actor, sólo se está solicitando una información genérica, tanto así que alternativamente se solicita que los datos a

proporcionar sean numéricos. Pero, por otro lado, no basta con alegarse que la información pueda afectar la seguridad y/o poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas, sino que ello debe ser meridianamente acreditado.

11. Por tanto, este Colegiado no encuentra razón alguna para denegar la entrega de la información requerida bajo el argumento de la "seguridad de las personas involucradas", toda vez que la forma en que fue requerida está fuera de los alcances de las excepciones establecidas vía legal; máxime si el procurador público competente no ha justificado de forma alguna esta excepción". (subrayado agregado)

Sin perjuicio de lo antes expuesto y a mayor abundamiento, el numeral 3 del artículo 39 de la Ley N° 30934, Ley que modifica la Ley de Transparencia establece que los entes del sistema de justicia (Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura) tienen la obligación de hacer accesible al público la información que resulte relevante para el adecuado escrutinio de su labor, lo que incluye en el caso del Poder Judicial, su labor jurisdiccional precisando que este tiene la obligación de publicar en su portal de transparencia todas las sentencias judiciales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias y sumilladas en lenguaje sencillo, y que los dictámenes fiscales deben ser publicados en el portal de transparencia correspondiente⁴.

En tal sentido, atendiendo a que los dictámenes fiscales y las sentencias judiciales relacionadas, entre otros, con procesos penales han sido declarados como información de naturaleza pública, conforme a los parámetros de la Ley de Transparencia, el argumento desarrollado por la entidad para denegar el acceso a la información requerida, aludiendo de que se trata de documentación relacionada con actividades de detección y represión de delitos aduaneros, así como de tráfico ilícito de mercancías, pierde sustento a la luz de lo establecido en el antes citado numeral 3 del artículo 39 de la Ley N° 30934, que dispone la publicación de los dictámenes fiscales y la sentencia respectiva, de ser el caso, más aún si no se cuenta con la clasificación correspondiente de "reservada" de la referida documentación.

En consecuencia, la Presunción de Publicidad respecto del acceso a dicha documentación se encuentra plenamente vigente al no haber sido desvirtuada por la entidad; y al no haber la entidad desvirtuado el carácter público de la información requerida, corresponde estimar el recurso de apelación formulado por la recurrente y ordenar la entrega de la información pública requerida.

Finalmente, es pertinente indicar que de conformidad con al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, en aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, dado que con fecha 27 de diciembre de 2019, el señor Pedro Ángel Chilet Paz, Vocal Titular del Tribunal de Transparencia, presentó su abstención para participar en la resolución del presente caso, la cual fue declarada fundada por la Presidencia de la Sala, mediante la Resolución N° 010400912020 de fecha 30 de diciembre de 2019;

⁴ Conforme a los lineamientos y directrices establecidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

interviene la Vocal Titular de la Segunda Sala de esta instancia Vanessa Luyo Cruzado, conforme a la designación formulada mediante Resolución N° 031200112020 de fecha 12 de febrero de 2020 y a lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, y asume temporalmente las funciones de la presidencia de esta Sala la Vocal Titular María Rosa Mena Mena, conforme a la designación formulada mediante Resolución N° 031200202020, de fecha 13 de febrero de 2020 y a lo dispuesto por el inciso 10-A 5 del artículo 10-A del mencionado Decreto Supremo;

Por los considerandos expuestos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 y en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por **IRIS NONOY VEGA CARREAZO**, **REVOCANDO** lo dispuesto en el correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2019; y, en consecuencia, **ORDENAR** a la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT** que entregue la información pública requerida, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- SOLICITAR a la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT** a efectos de que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, acredite documentalmente la entrega de dicha información a **IRIS NONOY VEGA CARREAZO**.

Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

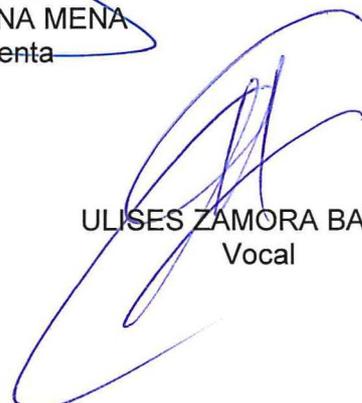
Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a **IRIS NONOY VEGA CARREAZO** y a la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT**, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la norma antes citada.

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional (www.minjus.gob.pe).


MARÍA ROSA MENA MENA
Vocal Presidenta


VANESSA LUYO CRUZADO
Vocal

vp: mmmm/derch


ULISES ZAMORA BARBOZA
Vocal

